

RETORNO A LA POLÍTICA SÍ, PERO ¿QUÉ POLÍTICA?

La actual crisis económica ha puesto al descubierto el predominio absoluto de la economía, y más concretamente de un tipo de economía de corte neoliberal, sobre la política. En los últimos años se ha producido un evidente predominio de las fuerzas económicas globalizadoras representadas por el mercado, sobre las entidades e instituciones políticas. La ausencia de lo político ha permitido a las grandes corporaciones transnacionales llevar a cabo, en la práctica, una auténtica toma del poder, un verdadero control del mundo al margen de la política. El problema radica en que, tal como estamos viendo estos días, tanto los objetivos como el funcionamiento de estas corporaciones constituye la quintaesencia de lo que no debe ser un sistema democrático.

El caos al que nos está llevando la crisis económica ha hecho levantar la voz a favor de una vuelta a la política. Estoy totalmente de acuerdo con la necesidad de reforzar las instituciones políticas frente a la acción del mercado, pero no creo que ese reforzamiento deba venir de la mano de los Estados y, más concretamente en nuestro caso, de los Estados europeos individualmente considerados, sino más bien de la mano de la UE entendida como una única institución.

La crisis económica nos está demostrando que, en el momento actual, los viejos Estados nacionales son incapaces de regular los usos y, por ende, los abusos de los mercados globalmente entrelazados. Es cierto que los Estados mantienen todavía una gran capacidad para regular aspectos muy importantes de la vida de los ciudadanos, pero ya no tienen los medios para oponerse a los mercados, ya no controlan los cambios ni los flujos de dinero, de informaciones o mercancías. Los Estados son incapaces de abordar los problemas derivados del complejo mundo actual y, de hecho, actúan tan sólo sobre una parte mínima del conjunto de las necesidades e intereses humanos.

Frente a esta realidad, en un alarde combinado de ceguera y egoísmo, nuestros líderes europeos siguen siendo muy reticentes a reforzar la Unión y cual pequeños virreyes se niegan con subterfugios ridículos, a reconocer la realidad y a establecer, de una vez por todas, una organización política unida y fuerte, acorde con los retos planteados por el nuevo siglo.

El caos provocado por la crisis económica en la UE y la desastrosa gestión de la misma por parte de los responsables políticos europeos ha puesto de manifiesto el gravísimo y delicado momento por el que atraviesa el proceso de integración europea. Se trata de un auténtico colapso que va más allá del ámbito estrictamente económico y que afecta a toda su estructura, a las tres grandes patas, (lo que en lenguaje comunitario se definía como los tres pilares), sobre las que se asienta el diseño de la UE: la unión económica, la unión política y la visibilidad de la UE en el panorama mundial.

Ahora bien, en contra de una idea bastante arraigada, la marcha atrás del proceso de integración europea no constituye una consecuencia derivada de la crisis económica, sino que tiene carácter previo y abarca a aspectos que van más allá de lo estrictamente económico. Desde hace más de quince años venimos asistiendo a un proceso constante de renacionalización de las políticas por parte de los Estados el cual ha provocado un progresivo debilitamiento de la UE. Ello ha traído como consecuencia un evidente enfriamiento del europeísmo e, incluso, en no pocos países, un auténtico sentimiento antieuropeo. No es posible señalar aquí las múltiples y complejas causas que han dado lugar a esta situación lamentable. Podríamos señalar no obstante, y entre otras, los cambios provocados



por el proceso de globalización, origen de la crisis económica y financiera actual, el relevo generacional que ha llevado al olvido la terrible tragedia de las guerras mundiales que asolaron Europa el pasado siglo y, sobre todo, la ceguera y demagogia de los líderes políticos de la última generación. Unos líderes incapaces de asumir que la consolidación de un espacio pacífico, próspero, democrático y con entidad suficiente para jugar un papel de primer orden en el mundo es una tarea que va mucho más allá de los cálculos mezquinos y coyunturales. Unos líderes lamentables que no entienden, y al parecer ni tan siquiera les interesa entender, que la solución a la actual situación catastrófica no puede venir establecida en términos de beneficio o interés particular de los Estados, sino que debe asentarse en valores, convicciones y creencias comunes.

Asistimos, por lo tanto, no solo al fracaso de la unión económica sino, también al fracaso de la unión política y, en definitiva, el fracaso de la idea de Europa. Se está tambaleando el sueño de la Europa unida. Así lo demuestran el alza de los populismos y la extrema derecha, el avance imparable del racismo y la xenofobia que campan cada vez más a sus anchas a lo largo y ancho del territorio europeo.

Cualquier retroceso o cesión en la defensa de los derechos fundamentales por parte de los Estados europeos y subsidiariamente por parte de las instituciones europeas, por mínima que ellas sean (y desgraciadamente están siendo muchas y cada vez más frecuentes) no hacen sino envalentonar el discurso radical nacionalista y xenófobo y caer un escalón más en el proceso de degradación democrática.

¿Qué podemos hacer ante esta situación? La respuesta radica en volver a la política, pero no a cualquier tipo de política sino a una política democrática renovada y acorde con las necesidades actuales. Veámoslo.

Un sistema político sólo puede ser democrático si es capaz de actuar independientemente de cualquier restricción impuesta por cualquier otro tipo de fuerza u organización sea ésta de carácter político, económico, tecnológico, etc. Como ya he indicado antes, el actual proceso de globalización está condicionando de forma absoluta la actividad de los Estados democráticos. Hoy resulta muy difícil encontrar un sistema político que no se encuentre limitado por fuerzas u organizaciones externas reflejadas en eso que se ha dado en llamar el mercado.

El funcionamiento de muchas de estas organizaciones o corporaciones surgidas al amparo de la globalización constituye la quintaesencia de lo que no debe ser un sistema democrático. La práctica totalidad de esas organizaciones actúan completamente al margen de los ciudadanos. Carecen de legitimidad de origen pues, en la mayor parte de los casos, ni han sido elegidas, ni son susceptibles de control democrático. Y carecen de legitimidad de ejercicio, dado que su actividad y sus decisiones son claramente ineficaces desde el punto de vista democrático.

Su actividad no se rige por las reglas de la democracia sino por la lógica de la tecnocracia. La tecnocracia no percibe a los individuos como ciudadanos, como sujetos públicos de derechos y obligaciones, sino como piezas de una serie de engranajes de producción y consumo. Quienes nos gobiernan en la práctica no son los representantes elegidos por los ciudadanos, sino una pléyade de economistas, gestores, ingenieros, científicos, juristas, y todo tipo de expertos. Son ellos quienes deciden por los ciudadanos, sin ningún tipo de transparencia, y con total ausencia de sometimiento alguno al control democrático. Cuando fallan las políticas diseñadas y aplicadas por estos expertos y cuando sus errores provocan consecuencias, en muchas ocasiones muy graves sobre inmensos contingentes de población, tal como desgraciadamente está ocurriendo con la gravísima crisis económica mundial actual, nadie resulta responsable.

La concentración del poder y el conocimiento en manos de las élites corporativas hace que las posibilidades de participación política de los ciudadanos queden reducidas a niveles mínimos debilitándose así el concepto de ciudadanía. La mayor parte de las decisiones importantes se adoptan hoy en día con el mayor de los secretismos dentro de los cuarteles generales de los grandes grupos corporativos y en las estructuras burocráticas de los gobiernos o, en su caso, a través de una política tácita marcada por las fuerzas del mercado.

Como ya he señalado antes, la ausencia de una política democrática a escala global está permitiendo que las grandes organizaciones y corporaciones transnacionales estén llevando a cabo, en la práctica, una auténtica toma del poder, un verdadero control del mundo al margen de la política. Bajo el velo de una presunta racionalidad económica –que a la postre ha resultado totalmente falsa– esas organizaciones y corporaciones transnacionales han pasado a ocupar, de forma imperceptible, sin revolución, sin cambio de leyes ni de constitución, mediante el simple desenvolvimiento de la vida cotidiana, los centros materiales vitales de la sociedad. Y todo ello, condicionando y en algunos casos obviando el sistema político –gobierno, parlamento, opinión pública, jueces, etc...–.

De este modo, el Estado democrático está siendo reemplazado por un Estado de derecho privado, desprovisto de cualquier referencia al desarrollo de los derechos humanos, y reducido a un código de reglas estrictamente basado en criterios de eficacia. A modo de ejemplo, ¿alguien se atrevería a pensar o afirmar que las reuniones anuales de Davos reflejan de verdad las aspiraciones, los intereses y la voluntad de la inmensa mayoría de los ciudadanos del mundo?

La ausencia de una política democrática de nivel global está provocando una auténtica falta de orden, una verdadera anarquía internacional tal como lo demuestran los cada vez más brutales niveles de desigualdad y pobreza. Estamos viviendo una crisis general de legitimación no sólo de los Estados, sino también del orden internacional por ellos creado. Cada vez resulta más insostenible el mantenimiento del actual sistema asimétrico y desigual de relaciones internacionales. No parece exagerado afirmar que el surgimiento de estas nuevas fuerzas o actores están cuestionando los fundamentos básicos de la democracia. Resulta cada vez más manifiesto el desequilibrio existente entre el grado de desarrollo tecnológico, económico y científico derivado del proceso de globalización, por un lado, y el nivel de institucionalización jurídico-política de la sociedad actual, por el otro. Los centros de poder político tienen cada vez más problemas para mantener su legitimidad dada su creciente incapacidad para controlar a las fuerzas y grupos corporativos. Existe, como bien señala Habermas, un riesgo real de capitulación del Estado de derecho.

La realidad globalizadora obliga a la puesta en práctica, de forma urgente, de una verdadera integración mundial fundada en la justicia y el derecho. La necesidad de extender la democracia a todo ese conjunto de entes y organizaciones constituye una tarea ineludible e inaplazable. Y para ello resulta imprescindible la creación de algún tipo de estructura política, de gobernanza, capaz de coordinar, reproducir, o replantear a escala global, la autoridad y los poderes de los gobiernos estatales. Es cierto que ello plantea numerosos problemas de toda índole. De índole puramente organizativa pero también, y sobre todo, de índole democrática. Se precisa una gobernabilidad a escala mundial o, cuando menos en nuestro caso, a nivel europeo, una gobernanza capaz de coordinar y controlar las actividades de los Estados junto con la de los organismos intergubernamentales, las organizaciones no gubernamentales, y las corporaciones transnacionales. Una estructura en la que se combinen todos ellos, influyéndose mutuamente, para producir el sistema de gobernanza global.

Resulta indispensable, por lo tanto, plantear el paso de un sistema de democracias estatales a otro de democracias supraestatales, como es el caso de la UE o incluso, de democracia global. Las nuevas estructuras e instituciones emergentes deben configurarse de forma democrática, de modo que constituyan una fiel representación de la voluntad de los ciudadanos. Ello trae consigo dificultades inmensas que se sintetizan, en definitiva, en la gran cuestión de cómo hacer posible en este nuevo complejo de instituciones y organismos la aplicación de lo que constituyen las dos reglas de oro de la democracia, a saber, el control de los gobernados sobre los gobernantes y el mutuo control entre los gobernantes.

La democracia, tal como ha venido siendo entendida hasta ahora, está agotada. En un momento en el que resulta crucial examinar y debatir en serio los grandes desafíos a los que se enfrenta el actual mundo de la complejidad, un mundo en el que se entremezclan e intensifican las interconexiones e interrelaciones entre Estado y sociedad, entre fuerzas y procesos nacionales e internacionales, entre política y economía, entre derecho y tecnología, etc., la teoría y la práctica democráticas brillan por su ausencia.



La regeneración de la democracia pasa de modo imprescindible por la necesidad de responder al reto no sólo de la globalización económica, sino de la universalización entendida en su sentido más profundo, y ello implica un cambio radical de los paradigmas en los que, hasta ahora, se ha basado la teoría democrática. Y ese cambio no debe limitarse a una mera adecuación de las instituciones, estructuras y procedimientos sino que debe extenderse, también, a los propios valores y principios democráticos.

La superación de la actual situación de desencanto y frustración solo parece posible mediante la puesta en práctica de dos exigencias. De una parte, el desempeño de una disidencia activa que vaya implicando a un número cada vez mayor de ciudadanos en la exigencia de una aplicación efectiva de los derechos fundamentales. De la otra, la reconstrucción de un sistema político e institucional capaz de procesar las demandas de los ciudadanos y de controlar la actividad y el poder de los nuevos protagonistas de la nueva economía global.

Con respecto al primer aspecto urge trabajar con nuevas formas de pensamiento que permitan liberarnos de los corsés ideológicos del pasado y de las fidelidades impuestas por las doctrinas. Los intereses y las demandas de los seres humanos no pueden ser reducidos a un simple mercado. No existe auténtica democracia, sin una cohesión social y un sentido de comunidad dirigidos a la búsqueda del interés general de todos y cada uno de los ciudadanos.

En lo referente a la segunda exigencia resulta crucial la creación de mecanismos e instituciones capaces de controlar la actividad de las corporaciones y grupos de presión, así como de estabilizar y redistribuir los aspectos y funciones clave de la economía. La coordinación internacional, la cooperación entre las principales instituciones y organismos, y la movilización ciudadana en favor del logro de esos objetivos, permitirían crear un nuevo orden económico y social más justo y próspero. Se trata, en definitiva, de configurar un nuevo orden mundial y un nuevo sistema político global menos dependiente de las fuerzas del mercado y más pendiente del sufrimiento humano.

Es en este marco donde debemos situar la renovación del proceso de integración europeo. La Europa del futuro no debe descansar exclusivamente en la economía, ni tan siquiera en la política sino, sobre todo, en la cultura, en los valores, en los ideales. La Unión Europea debe responder con valentía y coraje ante los retos del siglo XXI. Está obligada a superar el grave impasse actual para volver a constituirse en un gran foco generador de una nueva civilización humana basada no sólo en intereses sino, sobre todo, en valores. A pesar de la crisis, nunca se ha dado en un espacio geográfico tan reducido un progreso socioeconómico, un desarrollo de la democracia y del Estado del bienestar y una diversidad cultural tan extraordinarios como los que se dan actualmente en Europa. Nuestro continente ha constituido un abigarrado mosaico humano en el que han convivido, más o menos civilizadamente, religiones, lenguas, culturas, costumbres y tradiciones extraordinariamente variadas. Todas estas conquistas corren serio peligro en el momento actual. Pero está en nuestras manos el volver a situarnos a la cabeza del progreso de la humanidad.